

CONDICION VEINTIDOS  
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital . . . . . 10  
Un semestre id. id. . . . . 6  
Un trimestre id. id. . . . . 4  
Números sueltos. . . . . 0'25  
Se publica todos los días excepto los domingos, Viernes Santo, Ascensión, Natividad, Corpus Christi y San Roque.

# BOLETIN OFICIAL

## DE LA PROVINCIA DE ORENSE

**ADVERTENCIA.**—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular, á los veintidos días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*. (Artículo 1.º del Código civil.)

### PARTE OFICIAL

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

**SS. MM. el Rey, y la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.**

#### MINISTERIO DE FOMENTO

##### REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Desierta la traslación á la cátedra de Derecho internacional público y privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago por falta de aspirantes; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien acordar que su provision se anuncie á concurso, con arreglo á las disposiciones vigentes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1894. —Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la cátedra de Perspectiva y Paisaje, vacante en la Escuela provincial de Bellas Artes de Barcelona, se provea por oposicion, con arreglo á lo terminantemente dispuesto en el art. 1.º del Real decreto de 13 de Febrero de 1880.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1894. —Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

(G. núm. 157)

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

##### REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Valencia y el Juez de primera instancia del distrito del Mar de dicha ciudad, de los cuales resulta:

Que en 22 de Junio de 1893, el Procurador D. Eliseo Perales, en nombre y representación de doña Teresa Cardona, viuda de Valdoví, formuló demanda de interdicto de recobrar la posesion de una finca titulada del Recati, contra D. Vicente Valcanera Sanz, vecino de Villanueva del Grao, por los siguientes hechos: que desde el día 11 de dicho mes de Junio, los guardas de la caza de la dehesa de la Albufera, recorrían el perímetro de la finca y hasta se albergaban en la casa que en la misma existe, sin retirarse, á pesar de las exhortaciones que se les habian hecho, alegando que aquel terreno estaba incorporado al mencionado monte público, de cuya caza era arrendatario Valcanera, y que como no era cierto que la finca de que se trataba estuviera en todo ni en parte incorporada al monte del Estado, pedía al Juzgado que declarara haber lugar al interdicto, mandando reponer y mantener á su representada en la posesion que tenia sobre la finca referida.

Que cumplidos los trámites legales, recayó sentencia en 17 de Julio del mismo año, declarando haber lugar al interdicto; que contra esta sentencia interpuso el demandado recurso de apelacion y el de reposicion de una providencia, y estándose tramitando este último recurso, fué el Juzgado requerido de inhibicion por el Gobernador civil de la provincia, á instancia del demandado y de acuerdo con la Comision provincial, fundándose la Autoridad administrativa en que los dueños de la finca llamada El Recati se habian apropiado una parte de terreno plantado de pinos de la dehesa de la Albufera, y habian abierto un canal llamado Parellonet que separaba esa parte del terreno de la dehesa y en él edificaron una pequeña casa; que en virtud de reclamaciones de los arrendatarios de los aprovechamientos de la dehesa de la Albufera, el Ingeniero Jefe de montes instó al Gobierno civil de la provincia á publicar en el

*Boletín* el oportuno anuncio para incluir en el Catálogo de montes públicos el terreno comprendido entre el Parellonet y el Perelló, y así se hizo en el *Boletín* de 2 de Febrero de 1893, concediendo un plazo de tres meses para que presentaran sus reclamaciones los que se creyeran con derecho á la propiedad del todo ó parte del referido terreno; que durante los tres meses, ninguna reclamacion se presentó, por lo cual se intentaba incluir en el Catálogo el terreno en cuestion; que posteriormente, el Ingeniero Jefe de Montes y el Jefe de la Sección de Fomento, practicaron una minuciosa inspeccion sobre el terreno, confirmando que era del Estado, por formar parte de la dehesa de la Albufera, y en su consecuencia, el Gobernador hizo la adjudicacion provisional á favor del Estado, encargando de su guarda al arrendatario de la dehesa; y hallándose sin amojonar el indicado trozo y sin resolver en definitiva la Direccion general, el conocimiento del asunto correspondía á la Administracion, según lo dispuesto en el art. 4.º del reglamento para la ejecucion de la ley de 24 de Mayo de 1863; que á la Administracion corresponde establecer reglas para el aprovechamiento de los montes públicos y resolver las cuestiones que surjan acerca de su disfrute, manteniendo en este al Estado; y por último, que no cabe contrariar por medio de interdicto las providencias administrativas que para el ejercicio de aquellas facultades se dicten, debiendo los que se crean con derecho á la propiedad de dichos montes hacer uso de los recursos gubernativos antes de acudir á los Tribunales; el Gobernador citaba además los artículos 2.º y 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdiccion, alegando: que los Tribunales ordinarios eran los únicos competentes para conocer del asunto, con arreglo á los artículos 2.º de la ley orgánica del poder judicial y 1.651 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil; que la parte demandada en el juicio verbal habia manifestado que no tenia nada que oponer á la demanda, ni proponer, por consiguiente, prueba alguna, con lo cual habia reconocido la extralimitacion y exceso cometidos en la finca El Recati, y que las disposiciones legales invocadas por el Gobernador en apoyo de su com-

petencia no eran aplicables al presente caso, pues no se ponía obstáculo á la inclusion de monte alguno en el Catálogo, ni se disputaban al Estado la propiedad, ni aun la posesion definitiva de ningun terreno, ni se coartaban en lo más mínimo las facultades propias de la Administracion, ni se contrariaba ninguna providencia de la misma:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comision provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 4.º del reglamento para la ejecucion de la ley de 24 de Mayo de 1863, que dice: «Los que hayan de reclamar contra la pertenencia designada á un monte en el Catálogo, apurarán primero la via gubernativa, deduciendo el derecho de que se crean asistido en esta forma: Si la propiedad de un monte se atribuyese al Estado ó cualquiera de las corporaciones dependientes de la Administracion central, se dirigirán las reclamaciones al Ministerio de Fomento, acompañadas de los títulos y documentos que les sirvan de fundamento. Si la propiedad se atribuye á un pueblo ó á cualquiera corporacion dependiente de la Administracion local, entonces se dirigirán las reclamaciones al Gobernador de la provincia, acompañadas de los correspondientes títulos y demás documentos justificativos.»

Visto el art. 17 del mismo reglamento, según el cual corresponde á la Administracion el deslinde de todos los montes públicos; debiendo hacerse esta operacion según las prescripciones contenidas en los artículos siguientes:

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo de interdicto promovido por doña Teresa Cardona para recobrar la posesion de una parte de la finca titulada El Recati, contra el arrendatario de la dehesa Albufera.

2.º Que con anterioridad al interdicto se habia empezado á inscribir el oportuno expediente administrativo para la inclusion del terreno de que se trata en el Catálogo de montes públicos, no habiéndose presentado reclamacion alguna por parte de los dueños de la finca El Recati en el plazo fijado en el anuncio inserto en el *Boletín* de la provincia.



3.º Que á la Administracion corresponde, segun los artículos citados del reglamento de Montes, el deslinde de todos los montes públicos, con sujecion á las reglas que en el mismo se determinan, debiendo emplear los que se crean perjudicados en sus derechos los recursos que en el mismo reglamento se establecen hasta apurar la via gubernativa.

4.º Que, por lo tanto, no procedia ni ha debido admitirse el interdicto origen de esta competencia, porque tiende á contrariar providencias de la Administracion tomadas en materia, cuyo conocimiento le está atribuido expresamente por la ley.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro. — Maria Cristina. — El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. (G. núm. 131.)

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador de la provincia de Málaga y el Juez del distrito de la Alameda de dicha capital, de los cuales resulta:

Que por Real orden de 6 de Junio del año último fué concedida al Ayuntamiento de Málaga la autorizacion que habia solicitado para imponer arbitrios extraordinarios sobre varias especies no tarifadas, á fin de cubrir el déficit que le resultaba en su presupuesto ordinario para el presente año económico, especies entre las cuales se encuentran las avellanas y cacahuets que no se destinan á pasto del ganado:

Que en 12 de Julio del año próximo pasado, se elevó á escritura pública, otorgada por el Alcalde y Síndico del Ayuntamiento de Málaga y don José Fernandez Capela, apoderado de don Francisco Leimon Rebollo, el convenio establecido con éste, como arrendatario de consumos para la recaudacion de los artículos que constituyen la tarifa 3.ª de los adicionados á las de la Hacienda, siendo una de las condiciones de dicho convenio que á tenor del de derechos módicos celebrado con la Liga de contribuyentes, el arrendatario cobraría los derechos módicos estipulados sobre las especies señaladas, sea cualquiera el punto y uso á que sean destinados sobre la total introduccion, á cuyo efecto las clases habian renunciado á lo preceptuado en el art. 140 de la instruccion en beneficio de los intereses comunales:

Que ante el referido Juzgado se presentó escrito por D. Joaquin Inglada Torregrosa, denunciando el hecho de que la Administracion de consumos le habia exigido los derechos correspondientes á ocho sacos de cacahuets, por los cuales satisfizo 12 92 pesetas, y cuyo tránsito por el ferrocarril del puerto para facturarlos con destino á Antequera habia solicitado el denunciante, hecho que, á juicio del mismo, constituia un delito y una infraccion del artículo 173 del reglamento para la Administracion y cobranza del impuesto de consumos:

Que ante el mismo Juzgado denunció D. Victoriano Morales y Gonzalez el hecho de que habiendo recibido 20 sacos de cacahuets, fruta conocida por avellana americana, y teniendo contratado el envío de dicha mercancía á Granada, solicitó el tránsito, negándose por la Administracion de consumos, exigiéndole el pago de derechos como si la mercancía estuviera destinada al consumo interior de la poblacion, habiendo satisfecho 47 pesetas

50 céntimos, hecho que á juicio del denunciante constituia un delito, agravado por la circunstancia de tener el culpable carácter público y una verdadera coaccion á la libertad industrial y mercantil, sancionada por la Constitucion y demas disposiciones que la regulan:

Que acumuladas las dos denuncias y hallándose el Juzgado practicando varias diligencias del sumario, el Gobernador de Málaga, á instancia del Alcalde de dicha capital, y oida la Comision provincial, dirigió dos oficios al Juzgado, requiriéndole de inhibicion en las diligencias que instrua contra la Empresa de consumos, sobre exaccion ilegal, á instancias de D. Joaquin Inglada y D. Victoriano Morales, alegando que á los Gobernadores de provincia compete promover las cuestiones de competencia para reclamar el conocimiento de los negocios que en virtud de disposicion expresa corresponde á los mismos, á las Autoridades dependientes de ellos ó á la Administracion pública en general; que la Empresa de consumos verificó el cobro á D. Joaquin Inglada y D. Victoriano Morales, como subrogada en el lugar, grado y derechos del Municipio de Málaga, á virtud del contrato con ella celebrado, que la cuestion reglamentaria entre arrendatario y contribuyentes será resuelta por los Administradores de contribuciones cuando el arriendo está celebrado directamente por la Hacienda y por los Alcaldes de las poblaciones en los demás casos. El Gobernador citaba los artículos 2.º y 8.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, 129 de la instruccion de consumos de 21 de Junio de 1889 y dos decisiones de competencia:

Que tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdiccion, fundándose en que, aparte de que el testimonio que consta en autos no declara la facultad que el representante de la Empresa de consumos señala como concedida por el Municipio de Málaga, los artículos 140 y 173 del reglamento de Consumos, expresamente consignan la excepcion de pago respecto de las especies que atraviesan de tránsito; y prohibido como se halla el gravarlas, el percibir derechos por tal concepto no puede suscitarse cuestion previa que deba ser resuelta por el Administrador de Contribuciones, ya que ese acto, no susceptible de contratacion, implica desde luego la ejecucion de un delito previsto en el artículo 225 del Código penal: en que, aun dando por admitida la facultad que el arrendatario alega le fué concedida por el Municipio para el cobro de las especies referidas, esa facultad, por no ser emanada de Autoridad competente, no puede ser motivo para atribuir competencia á la Administracion á fin de resolver los extremos denunciados por Inglada y Morales, y en que el caso de que se trata no está comprendido entre aquellos en que, por excepcion, pueden promoverse por los Gobernadores contenciosas de competencia en los juicios criminales:

Que el Gobernador, oida la Comision provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohibe á los Gobernadores promover contenciosas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion; ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestion previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar.

Visto el art. 129 del reglamento provisional para la imposicion, administracion y cobranza del impuesto de consumos de 21 de Junio de 1889, segun el cual las cuestiones reglamentarias entre arrendatarios y contribuyentes serán dirimidas por el Administrador de Contribuciones cuando el arriendo esté celebrado directamente con la Hacienda, y por los Alcaldes de las poblaciones en los demás casos. Si los interesados no se conformaren con las decisiones que respectivamente dicten, podrán entablar reclamacion en el término de diez dias desde el en que haya tenido lugar la comparecencia ante el Delegado de Hacienda de la provincia, quien fallará en primera instancia:

Visto el art. 130 del propio reglamento, que dice lo siguiente: «Contra las resoluciones del Delegado, podrá entablarse recurso por los interesados, dentro del término de quince dias, siguientes al de la notificacion administrativa, ante la Direccion del ramo si la cuantia de la cuestion no excediese de 500 pesetas, y ante el Ministro de Hacienda si fuese superior.

La resolucion que dicten la Direccion y el Ministerio, respectivamente, pondrá término á la via gubernativa.»

Visto el art. 140 del reglamento que viene citándose, que dispone que en todas las poblaciones donde la introduccion anual de cualesquiera especies gravadas sea cuatro veces mayor, por lo menos, que el consumo que se haga de aquella, sobre lo cual se formará juicio por el resultado que ofrezca el año comun de un trienio ó quinquenio, la Administracion ó los subrogados en sus derechos, y el comercio por teci proca conveniencia, podrán establecer derechos módicos exigibles sobre la totalidad de las introducciones, exceptuando únicamente las especies que atraviesan de tránsito, en sustitucion á las de tarifa, que solo son exigibles sobre los consumos. Cuando la peticion de establecimiento de derechos módicos se haga por la unanimidad de cosecheros ó industriales que especulen con la especie ó especies en las que se solicite los módicos, será obligacion aceptarlo á la Administracion ó al subrogado en sus derechos, siempre que concurren las circunstancias que determina el párrafo anterior:

Visto el art. 173, tambien de dicho reglamento, conforme á cuyas disposiciones las especies que atraviesan de tránsito por el caso no adeudarán derecho alguno, pero serán vigiladas desde el punto de entrada al de salida, y siempre que se estime conveniente, hasta el límite del radio:

Considerando:

1.º Que el hecho que ha dado lugar á la formacion de la causa consiste en haberse exigido y cobrado por la Administracion de Consumos de Málaga á D. Joaquin Inglada y D. Victoriano Morales ciertos derechos correspondientes á mercancías que aquellos introdujeron como de tránsito en la referida poblacion:

2.º Que en el presente caso existe una cuestion previa que debe ser resuelta por la Administracion, cual es el decidir si el arrendatario de dicho impuesto obró ó no con arreglo á las disposiciones vigentes en la materia y al contrato celebrado al exigir los derechos de que se trata.

3.º Que la resolucion administrativa que se dé á ese extremo puede influir en el fallo que en su día dicten los Tribunales respecto al hecho denunciado, y, por tanto, se está en uno de los dos casos en que, por excepcion, pueden promoverse contenciosas de competencia en los juicios criminales:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el

D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro. — Maria Cristina. — El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. (G. núm. 138.)

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador de la provincia de Santander y la Audiencia de dicha capital, de los cuales resulta:

Que la Guardia civil detuvo á Juan Martinez y Claudio Diez el dia 2 de Marzo de 1893 por conducir, sin autorizacion para ello, 11 traviesas de madera de roble verde en dos carros; é instruida la correspondiente causa de clararon los detenidos que dichas traviesas procedian de un aprovechamiento que se habia concedido á Tomás Labandón, con quien los detenidos habian celebrado un contrato verbal, en virtud del cual se comprometieron á elaborar y conducir los 100 robles subastados por aquél:

Que recibida declaracion á Tomás Labandón, manifestó que, en efecto, tenia concedida una subasta en el monte Tulendre, en virtud de la que le correspondia el aprovechamiento de 100 robles, habiendo contratado con Juan Martinez y Claudio Diez y otro el laboreo y transporte de las maderas al puente de Asnil, donde debian entregarlas al declarante ó á su representante; que no tenia noticia de que Diez y Martinez hubieran transportado maderas de dicha subasta, pero que creian que habian ido á elaborarlá; sin que lo supiera de cierto; y por último, que ignoraba la procedencia de las maderas cogidas por la Guardia civil á Martinez y Diez y si faltaban algunos árboles de los subastados por el declarante:

Que del informe pericial de los capataces de cultivo resulta: que reconocido el monte Tulendre, propio del pueblo de Torices, en donde se estaba llevando á cabo una corta de 100 robles por el rematante Tomás Labandón, no se habia extraído producto alguno de aquellos árboles, y que no se habia practicado la operacion de marcar los robles que habian de ser extraídos como objeto de la subasta, siendo indudable que las traviesas ocupadas por la Guardia civil no procedian de dicha subasta, por carecer de marco, siendo el valor de las traviesas 16 50 pesetas; y por último, que no se habia visto señal alguna en el monte para poder afirmar el punto de donde procedian las traviesas:

Que Juan Martinez acudió al Gobernador de Santander en solicitud de que requiriese al Juzgado de instruccion de Potes, y, pedido informe al Ingeniero Jefe de montes de aquella provincia, manifestó que en 22 de Febrero del año próximo pasado se habia hecho la entrega de 100 robles, adjudicados á D. Tomás Labandón, en el monte Tulendre, del pueblo de Torices, sin que constara que se hubiera extraído producto alguno del monte ni tampoco que se hubiera pedido ni concedido permiso para serrar las maderas del mismo; de modo que el informante carecia de datos para suponer que los productos de que se trata, embargados en el sitio puente Asnil, procedieron del aprovechamiento legal referido, sin que hubiera méritos para informar en sentido favorable á la pretension de Juan Martinez, puesto que el caso está comprendido mejor en el párrafo segundo del art. 4.º que en la regla 1.ª del art. 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comision provincial, requirió de



inhibición á la Audiencia de Santander, á la que se había remitido el sumario, una vez terminado éste por el Juez de Potes, fundándose el Gobernador en que los productos extraídos proceden de un aprovechamiento concedido, pero no autorizado todavía, hallándose por tanto, el caso comprendido en la regla primera del art. 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884:

Que, sustanciado el incidente, la Audiencia sostuvo su jurisdicción, alegando que los hechos objeto del proceso revisten caracteres de un delito de hurto, porque las maderas ocupadas á los procesados por la Guardia civil no procedían del aprovechamiento concedido. La Audiencia citada la regla 1.ª del art. 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, el art. 530 del Código penal y los artículos 299 y 300 de la ley de Enjuiciamiento criminal:

Que el Gobernador de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 4.º del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, según el cual los que cortaren ó arrancaren árboles, leñas gruesas ó ramaje, cepas ó tocones, serán castigados con una multa igual al valor de los productos, decomisándose éstos. Si los productos hubiesen sido extraídos del monte con ánimo de lucrarse, entenderán los Tribunales ordinarios, con arreglo al Código penal:

Vista la regla 4.ª del art. 40 de dicho Real decreto, que dispone que cuando la infracción de un precepto de la ley y disposiciones vigentes que tengan penalidad señalada haya sido el medio de perpetrar un delito definido en el Código, se reservará su castigo á los Tribunales:

Considerando:

1.º Que según los datos que constan, tanto en el expediente gubernativo como en el proceso, hay indicios de que las traviesas encontradas á Juan Martínez y Claudio Díez no procedían del aprovechamiento concedido á Tomás Labandón, según se deduce del informe del Ingeniero Jefe de montes y de las declaraciones prestadas por los capataces de cultivo y por el mismo rematante.

2.º Que en tal supuesto, el hecho de que se trata reviste caracteres de delito, correspondiendo su conocimiento y castigo, en su caso, á la jurisdicción ordinaria, sin que la Administración tenga que resolver cuestión alguna previa.

3.º Que no se está, por tanto, en ninguno de los dos casos en que, por excepción, pueden promoverse contiendas de competencia en los juicios criminales.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. (G. núm. 155)

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Santander y la Audiencia de dicha capital, de los cuales resulta:

Que con fecha 18 de Julio de 1893, D. Remigio Herrero Lama formuló escrito de denuncia ante el Juzgado municipal de Potes, expresando:

Que al dársele conocimiento y enterarse de la comunicación que con fecha 12 de dicho mes había pasado al Juzgado la Alcaldía de dicha villa, á quien en las diligencias de ejecución en el fallo recaído en un juicio de desahucio seguido contra su vecino Antón Zurro se lo había ordenado la retención de la cuarta parte del sueldo correspondiente á este, como barrendero de la localidad, le había sorprendido la manifestación que el Alcalde hacía de que el tal barrendero no cobraba sueldo del Ayuntamiento y que no podía, por lo tanto, hacerle el descuento que se le ordenaba; que siendo notorio que el Zurro estaba considerado de público como empleado dependiente del Municipio para prestar el indicado servicio, por el que percibía un sueldo ó gratificación que figuraba en los Presupuestos municipales y que había venido percibiendo de la Depositaria municipal, no era posible reconocer veracidad en la contestación de la Alcaldía, fundada en datos que no eran ciertos, para no hacer la retención indicada, incurriéndose con esto en una infracción legal la cual revistía tanta mayor gravedad cuanto se trataba de la ejecución y cumplimiento de un fallo judicial; que que pudiendo constituir tal hecho un delito definido y penado en el Código que diera lugar á un procedimiento de oficio, entendía que era necesario y procedente se instruyeran las oportunas diligencias á fin de hacer constar los extremos que en el escrito enumeraba, y comprobados que fuesen los mismos, se pasasen las actuaciones á la Audiencia de Santander, única competente para conocer de las causas contra los Alcaldes, por todo lo cual terminaba suplicando al Juzgado se sirviera proceder á la práctica de las diligencias que interesaba y demás necesarias para demostrar el abuso del Alcalde que pudiera estar comprendido en el art. 324 del Código penal:

Que ratificado el querellante en la denuncia extractada, fueron instruidas las primeras diligencias por el Juez municipal, quien luego las elevó al Juzgado de instrucción de Cabuérniga el cual, por delegación de la Audiencia, siguió conociendo de las mismas decretándose el procesamiento del Alcalde referido:

Que el Gobernador de Santander, á quien el Alcalde de Potes había acudido solicitando de su Autoridad requiriese de inhibición á la Audiencia, lo hizo así, de acuerdo con el informe de la Comisión provincial, alegando: que por proceder la causa que se seguía sobre denegación de auxilio y falsedad de un acto puramente administrativo cual era la renuncia y separación del barrendero de la villa, cualquiera reclamación que en contra de ella se interpusiera, había de ser en la misma vía; por tratarse de una materia que exclusivamente correspondía á los Ayuntamientos, según el art. 78 de la ley Municipal, contra la que sólo cabía el recurso que autorizaba el art. 171; que al inmiscuirse en el asunto el Juzgado municipal, lo hizo competente, por lo que no pudo cometerse el delito que se perseguía, pues para que el Tribunal ordinario interviniera era necesario que procediera la declaración gubernativa diciéndolo así, y únicamente en los casos que taxativamente determina el art. 198 se puede ejercer la acción criminal contra los

Alcaldes y Concejales, en ninguno de los que se hallaba comprendido el que se trataba; y citaba además el Gobernador el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el incidente de competencia la Audiencia sostuvo su jurisdicción, alegando: que la simple lectura de las actuaciones bastaba para demostrar que el procedimiento no tenía por objeto inspeccionar el Archivo municipal de Potes, ni tampoco censurar ni aprobar la separación del barrendero de la villa Antón Zurro, pues era bien patente que las diligencias se dirigían á averiguar y conocer si se habían cometido los delitos de denegación de auxilio y falsedad definidos en los artículos 380 y 324 del Código, cuyo conocimiento correspondía exclusivamente á la jurisdicción ordinaria, según disposición del art. 76 de la Constitución del Estado, 10 de la ley de Enjuiciamiento criminal, en relación para el caso de actos con el 303, en su último párrafo, de dicha ley procesal; que tampoco podía dársele del derecho de los Jueces á ser auxiliados por las Autoridades administrativas para la formación de los sumarios y comprobación de los delitos, como claramente lo prevenía el art. 3.º del libro 2.º y 335 de la citada ley ritual; y que por los fundamentos legales aducidos, quedaba demostrado que por la jurisdicción ordinaria no se habían invadido las atribuciones de la Administración, como se decía en el oficio inhibitorio, sino que, por el contrario, lo habían sido las del Tribunal, paralizando el curso de los autos, á pesar de la prohibición general de interponer competencias en asuntos criminales, dado que en el presente caso no existía cuestión alguna previa que resolver:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 2.º de la ley orgánica del Poder judicial, que dice: «La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá exclusivamente á los Jueces y Tribunales.»

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, según el cual los Gobernadores no podrán suscitár contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo de la denuncia formulada ante el Juzgado municipal de Potes por don Remigio Herrero Lama.

2.º Que los hechos en la misma contenidos pudieran ser constitutivos de delitos definidos y penados en el Código penal, cuyo conocimiento compete exclusivamente á los Tribunales del fuero común, con sujeción á lo dispuesto en el art. 2.º citado de la ley orgánica del Poder judicial:

3.º Que no existe en el presente caso cuestión alguna previa que haya de resolver la Administración y de la cual pueda depender el fallo que en su día dicten los Tribunales ordinarios, por lo que no es de aplicar la excepción contenida en el art. 3.º del Real decreto también citado.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el

Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. (G. núm. 156.)

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Pontevedra y el Juez de primera instancia de Puenteareas, de los cuales resulta:

Que con fecha 20 de Mayo de 1893, el Procurador D. Cándido Arbones, en nombre de D. Marcelino Durán Dieguez y otros labradores y vecinos de la parroquia de Santa María de Vide, dedujo ante el Juzgado de primera instancia de Puenteareas demanda de interdicto de retener y cobrar la posesión contra Antonia Gil y Taboada y su hija Juana García Gil, alegando los siguientes hechos:

Que sus representados eran dueños de diferentes terrenos en la parroquia de Vide, que fertilizaban y habían fertilizado siempre, á imitación de sus causantes y otros muchos más de la misma parroquia de Vide, las aguas conocidas por la del riego ó levada de Sequeiros, que tienen su origen en la parroquia de San Cipriano de Rivarterme, para lo cual venían establecidas desde tiempo inmemorial tandas ó turnos entre todos los regantes, siendo cada uno de éstos dueño de la porción de agua que en cada turno le correspondía, hasta el punto de adquirirla y transmitirla como cualquiera otra propiedad particular:

Que desde el anochecer del miércoles 5 de Julio de 1892, hasta la puesta del sol del siguiente día 7, correspondía regar á la primera tanda, de la cual eran regantes, entre otros, sus representados D. Marcelino Durán, Joaquín Castro, Manuel Gil y María Gil, y á la propia tanda volvía á corresponderle el agua desde el anochecer del domingo 17 de Julio del mismo año, hasta las siete de la mañana del siguiente, lunes 18; á la segunda tanda correspondía regar desde el anochecer del miércoles 20 de Julio del respectivo año, hasta las cinco de la tarde del jueves 21, y de ella eran regantes el mismo D. Marcelino Durán, Antonio Vera García, Manuel Domínguez Domínguez y Antonio Gil Álvarez; á la tercera tanda le correspondía desde el anochecer del jueves 21 de los expresados mes y año, hasta el amanecer del 22, siendo regantes en ella Benito Nanda González, Francisco Álvarez Barbeito y otros.

Que las demandadas Antonia Gil Taboada y su hija Juana García Gil cegaron el cauce ó levada que conducía las aguas para la parroquia de Vide, dirigiendo éstas por el cauce de la parroquia confinante de San Cipriano de Rivarterme, utilizando parte de ellas en sus fincas y dejando las restantes abandonadas, hecho que realizaron el jueves 7, lo repitieron en la noche del domingo 17, volvieron á repetirlo el miércoles 20 y de nuevo lo ejecutaron el jueves 21, todos del mes de Julio de 1892, privando á los regantes de cada tanda ó turno del uso y aprovechamiento de las aguas que les correspondían:

Que á virtud de tales hechos y de los fundamentos de derecho que se alegaban, terminaba el Procurador su escrito de demanda solicitando del Juzgado se sirviera admitirla, con los demás pedimentos procedentes en derecho:

Que admitida la demanda y practicada la información testifical ofrecida, fueron las partes convocadas á juicio verbal, en el que se admitió á las mismas las pruebas pertinentes, aparecien



do entre estas una certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Setados en 17 de Agosto de 1884, á virtud de expediente incoado con relación al aprovechamiento de las aguas de que se trata por Antonia Gil Taboada, y en el que se declaró que, por tratarse de un aprovechamiento de dominio privado, no era la Administración la competente para conocer del negocio, debiendo la interesada acudir con sus pretensiones á los Tribunales del fuero ordinario;

Que deducida instancia documentada ante el Gobernador de la provincia por Antonio Gil Durán y Juana García Gil en solicitud de que se requiriese de inhibición al Juzgado, dicha Autoridad, después de pedir informe al Ingeniero Jefe de Montes, que lo evacuó acompañándolo del oportuno croquis del terreno donde hacían y por donde discurren las aguas de que se trata, de acuerdo en un todo con las conclusiones del mismo, y en disconformidad con el parecer de la Comisión provincial, dirigió oficio inhibitorio al Juzgado, alegando: que según el art. 4.º de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, son de dominio público las aguas que nacen continúa ó discontinuamente en terreno de dominio público, y que en este caso se hallan las que utilizan los vecinos de Sequeiros; que según el art. 5.º de dicha ley, el derecho á aprovechar independientemente las aguas de manantiales y arroyos se adquiere por dueño de terrenos inferiores, y en su caso, de los colindantes, cuando las hubiere utilizado sin interrupción por espacio de veinte años, circunstancia que con exceso se daba en las utilizadas por los referidos vecinos de Sequeiros, pues la acequia que iba por el monte Dornalla databa de tiempo inmemorial, y el canalizo y demás señales que para regularizar el riego existía, revelaban una antigüedad, ni negada, ni puesta en duda por los vecinos de Vide, ya que sin estas aguas el vecindario de Sequeiros no tendría otras inmediatas para beber; que si entre los vecinos de Vide existían contratos de carácter civil para el aprovechamiento de las aguas que allí llegan, no podían referirse á otras que á las que bajaban de Cadeira por la acequia, no correspondiendo á las que pasaban por el canalizo, pues en este caso el vendedor carecería de derecho para ceder lo que legalmente no le pertenecía; y por último, que con arreglo al art. 248, caso 3.º, de la referida ley, corresponde á la Administración resolver definitivamente las cuestiones que se susciten en la aplicación de la misma, cuando no causen estado las decisiones de sus Delegados, salvo los recursos á que haya lugar con arreglo á la ley;

Que sustanciado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdicción, fundándose en que de los documentos y declaraciones testificales que aparecían en los autos, se deducía claramente que las aguas objeto de la cuestión entablada eran de dominio privado, no tan solo porque desde larguísima fecha venían aprovechándola los particulares y siendo objeto de contratos de compra y venta entre ellos, si que también por haberlo declarado así la Corporación municipal de Setados en sesión de 17 de Agosto de 1884; en que las providencias dictadas por la Corporación municipal en materia de aguas causan estado si no se reclama contra ellas ante el Gobernador en el plazo de quince días, según el art. 251 de la vigente ley de Aguas, y contra la dictada por el Ayuntamiento de Setados no se había reclamado, ó por lo menos, no constaba que se hubiera producido reclamación, habiendo causado estado dicho acuerdo, circunstancia por la que el presente caso se hallaba fuera del alcance de las disposiciones contenidas en el

núm. 3.º del art. 248 de la ley; en que el Gobernador fundaba su competencia en que siendo de dominio privado las aguas, y versando el interdicto sobre perturbación en la posesión de las mismas, su conocimiento competía á los Tribunales que ejercen la jurisdicción civil, conforme á lo ordenado en el núm. 1.º del art. 254 de la referida ley; en que todas las disposiciones de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, así como sus análogas, contenidas en el tit. 4.º, libro 2.º del Código civil, se hallan subordinadas á lo que preceptúan esas mismas leyes en los artículos 257 y 124, respectivamente, según los que, aquellas disposiciones no perjudican los derechos adquiridos con anterioridad á su publicación, ni tampoco al dominio privado que tienen los propietarios de aguas de acequias y de fuentes ó manantiales, en virtud del cual las aprovechan, venden ó permutan como propiedad particular, que era precisamente el caso en que se encontraban las de Sequeiros, como lo comprobaban de un modo evidente los documentos últimamente unidos á los autos, los cuales documentos no podían ni debían rechazarse por haber sido traídos á los autos en un trámite de competencia, puesto que no existía disposición alguna que autorizara su inadmision en tales circunstancias; y finalmente, en que esos derechos á las aguas de Sequeiros, adquiridas por sus llevadores con anterioridad á la publicación de la ley que rige en la materia, eran derechos de carácter esencialmente civil, cuyo conocimiento correspondía á los Tribunales de Justicia.

Que el Gobernador, de acuerdo con el informe de la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 4.º de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879; según el cual son públicas ó del dominio público las aguas que nacen continúa ó discontinuamente en terreno del mismo dominio, y las continuas ó discontinuas de manantiales ó arroyos que corren por sus cauces naturales.

Visto el art. 248 de la propia ley, que atribuye al Ministerio de Fomento la resolución definitiva de todas las cuestiones que se susciten en la aplicación de la presente ley, cuando no causen estado las decisiones de sus delegados y salvo los recursos á que haya lugar con arreglo á la misma.

Considerando:

1.º Que en el expediente se halla demostrado el carácter de públicas de las aguas de que se trata, tanto por los terrenos en que nacen, como por la índole de los cauces por donde corren hasta llegar al punto de bifurcación, en que se separan para beneficiar los predios de los vecinos de Vide y de Sequeiros.

2.º Que no puede entenderse causara estado, á los efectos de la resolución del presente conflicto, el acuerdo del Ayuntamiento de Setados, toda vez que dicho acuerdo debió referirse únicamente á los cauces por donde discurren las aguas á partir del punto referido de bifurcación y no á las partes de cauce anterior á dicha bifurcación, cuyo carácter de público no hay posibilidad de poner en duda.

3.º Que en tal supuesto es aplicable al caso de que se trata el art. 248 citado de la ley de Aguas, que claramente determina la competencia del Ministerio de Fomento para dirimir definitivamente la cuestión que se ventila.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro.—**Maria Cristina**.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. (G. núm. 153.)

## ANUNCIOS OFICIALES

### DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA

Se halla vacante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago la cátedra de Derecho internacional público y privado, dotada con el sueldo anual de 3 500 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso, con arreglo á lo dispuesto en el art. 226 de la ley de 9 de Septiembre de 1857, en el 2.º del reglamento de 15 de Enero de 1870 y demás disposiciones vigentes.

Pueden tomar parte en este concurso los Catedráticos numerarios de asignatura análoga de Universidad y los Auxiliares de Facultad con derecho reconocido al ascenso. Unos y otros deben hallarse en posesión de los títulos académicos y profesionales que les correspondan.

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes documentadas á esta Dirección general, por conducto del Rector ó Director del establecimiento en que sirvan, en el plazo improrrogable de un mes, á contar desde la publicación de este anuncio en la *Gaceta*.

Según lo dispuesto en el art. 41 del expresado reglamento, este anuncio debe publicarse en los *Boletines oficiales* de las provincias y por medio de edictos en todos los establecimientos públicos de enseñanza de la Nación; lo cual se advierte para que las Autoridades respectivas dispongan que así se verifique desde luego sin más aviso que el presente.

Madrid 27 de Mayo de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.

## AYUNTAMIENTOS

### SAN JUAN DE RIO

Formado el repartimiento de la contribución territorial de este Ayuntamiento para el entrante año económico de 1894-95, se expone al público por término de ocho días, poniéndolo de manifiesto en la Secretaría, con el fin de que los contribuyentes puedan examinarlo y presentar en dicho término las reclamaciones que procedan.

San Juan de Río 5 de Junio de 1894.—El Alcalde, Manuel Sabin.

### TABOADELA

El día 10 del corriente mes, de dos á cuatro de su tarde, tendrá lugar en la casa consistorial el arriendo en pública subasta de los puestos públicos de la feria de Santa Leocadia para el año próximo de 1894 á 95, y si al Ayuntamiento no le conviniere rematarla en este día, tendrá lugar otra segunda y última el día 17 siguiente á la misma hora de la primera y en el mismo punto, bajo la tarifa y pliego de condiciones que se halla de manifiesto en la Secretaría.

Taboada 4 de Junio de 1894.—El Alcalde, Juan Antonio Quintas.

## TRIBUNALES

### PRIMERA INSTANCIA

Don Gumersindo Bujan y Bujan, Juez de instrucción de este partido.

Se cita y emplaza á un sugeto conocido con el nombre de Juan Benito que se supone haber cumplido condena en la cárcel provincial de Orense en el año corriente, que viste decentemente y tiene mediano trato social, de regular estatura, gasta bigote negro algunas

veces, un poco hoyoso de viruelas, usa sombrero y capa de regular estado y ésta con embozos encarnados, dedicado á industrias reprobadas, entre las que ejerció la de vendedor de pendientes y pulseras de procedencia dudosa y toma el nombre de Investigador con el fin de estafar, para que en el término de diez días se presente en la cárcel de este partido, cuya prisión del mismo se halla acordada en el sumario que contra él instruyo sobre robo de dos cálices pertenecientes á la iglesia parroquial de Bobadela, de esta alcaidía, y otros efectos sagrados, los cuales fueron recobrados en parte en la ciudad de Santiago.

A la vez se recomienda á las autoridades de cualquiera clase la prisión de dicho sugeto y su conducción á la cárcel de esta villa.

Dado en Celanova á 4 de Junio de 1894.—Gumersindo Bujan.—El Secretario, Francisco Vazquez Rodriguez.

## ANUNCIOS

### M. VILLANUEVA Relojero.—Burgos

Relojes para Torre, y accesorios para los mismos, un 10 por 100 más baratos (en iguales clases) que las demás fábricas y depósitos de España.

### Fijarse bien

Los precios de mis relojes se entienden dando el reloj colocado en la torre, sin aumentar (como hacen otras casas) por accesorios, por colocación, etc., etc.

### En fin

Relojes completos y andando, desde 500 pesetas hasta 5000, según tamaño y lujo, garantizados por varios años y á pagar en plazos.

Además se hacen gratuitamente presupuestos de colocación.

### Fídanse catálogos

Dirección.—**M. VILLANUEVA**—Relojero—Burgos

### A LOS ENFERMOS DE LOS OJOS



Llegó el renombrado especialista en las enfermedades de la vista don M. Marbán, el cual tiene su gabinete Clínico Oftalmológico en la calle de Hernán Cortés núm. 7.

Horas de consulta y operaciones, de 9 á 12 de la mañana y de 3 á 5 tarde. Coloca y vende ojos artificiales.

NOTA.—En la primera visita serán desengañados los que no tengan remedio. =5

### SALON DE VESTIR DE SERAFIN FEIJOO

Plaza Mayor, 16.—Orense.

En este acreditado establecimiento hay un magnífico surtido en géneros propios de la estación.

Trazos hechos de lanas y de otros géneros para hombre desde 17 á 65 pesetas, uno, y se hacen á la medida á gusto del parroquiano con prontitud y esmero y sin necesidad de probarlos.

Hay capas de buenos géneros y bien heas, hc

Hay galones de cabos y sargentos, cordones, hombreras, cintas, botones y otros géneros para guardia civil.

### ABONARES DE CUBA

Los compra D. Demetrio Rodriguez SAN FERNANDO, 21.—ORENSE

Imprenta LA POPULAR